

**ENTRE LA II CUMBRE
Y LA DETENCION DE
PINOCHET**

CHILE 1998

FLACSO - Biblioteca

Flacso-Chile

Entre la II Cumbre y la detención de Pinochet, Chile 1998

Las opiniones que se presentan en los trabajos, así como los análisis e interpretaciones que ellos contienen, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de FLACSO-Chile, ni de las instituciones a las cuales se encuentran vinculados.

Ninguna parte de este libro/documento, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, transmitida o almacenada de manera alguna ni por algún medio, ya sea electrónico, mecánico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin autorización de FLACSO-Chile.

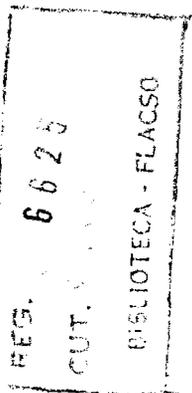
La publicación de este libro, que recoge parte de las actividades de FLACSO, ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Ford, The William and Flora Hewlett Foundation y la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur, a través del apoyo a los diversos programas de la institución.

322(83) FLACSO-Chile
F572 Entre la II Cumbre y la detención de
Pinochet, Chile 1998, Santiago, Chile:
FLACSO-Chile 1999
334 p.
ISBN: 956-205-134-X

ENCUESTAS POLITICAS / DERECHOS HUMANOS /
TRANSICION POLITICA / DESARROLLO ECONOMI-
CO / DESARROLLO POLITICO / ANALISIS POLITICO /
PARTICIPACION POLITICA / PARTICIPACION SO-
CIAL / JUVENTUD / MUJERES / POBLACION INDIGE-
NA / INTEGRACION ECONOMICA / POLITICA EXTE-
RIOR / PARTIDOS POLITICOS / CHILE

© 1999, FLACSO-Chile. Inscripción N° 109.675. Prohibida su reproducción.
Editado por FLACSO-Chile, Leopoldo Urrutia 1950, Ñuñoa
Teléfonos: (562) 225 7357-225 9938-225 9655 Fax: (562) 225 4687
Casilla electrónica: flacso@flacso.cl
FLACSO-Chile en Internet: <http://www.flacso.cl>

Producción editorial: Indira Palacios, Marcela Zamorano, FLACSO-Chile
Diagramación interior: Marcela Contreras, FLACSO-Chile
Diseño portada: A•DOS Diseñadores
Impresión: LOM Ediciones



INDICE

| | |
|--|-----|
| Presentación | 5 |
| <i>Francisco Rojas Aravena</i> | |
| CHILE Y LAS AMERICAS | |
| Nuestros miedos | 11 |
| <i>Norbert Lechner</i> | |
| Visiones latinoamericanas: Latinobarómetro 1998 | 29 |
| <i>Marta Lagos C.</i> | |
| El penúltimo año del siglo en América Latina | 47 |
| <i>Gabriel Gaspar T.</i> | |
| El proceso de Cumbres Hemisféricas: la nueva agenda de cooperación en las Américas | 63 |
| <i>Carlos Portales C.</i> | |
| POLITICA: EL PROCESO CONTRA PINOCHEF Y LOS DERECHOS HUMANOS | |
| Balance de la Política de Derechos Humanos en la transición chilena a la Democracia | 87 |
| <i>José Zalaquett</i> | |
| Pinochet y la justicia. Una reflexión sobre los cambios en el derecho | 99 |
| <i>Rogelio Pérez P.</i> | |
| El juicio de la historia. Espectros de pasado | 113 |
| <i>Detlef Nolte</i> | |
| Las agendas del sector Defensa y Pinochet | 125 |
| <i>José Luis Díaz</i> | |
| Reacciones de la Cancillería chilena durante el caso Pinochet | 137 |
| <i>CEDOC</i> | |

CIUDADANIA, PARTICIPACION Y POLITICAS SOCIALES

Chile 1997-1998. Las revanchas de la democratización incompleta 153

Manuel Antonio Garretón M.

Participación en políticas sociales: percepción de los usuarios 167

Marcela Noé E.

El control ciudadano de la Plataforma de Beijing: un proceso social en construcción 191

Teresa Valdés E., Indira Palacios V.

Rediseño de los partidos políticos 217

Carlos Eduardo Mena K.

La problemática indígena en el Chile actual 229

Gerardo Zuñiga N.

Adolescentes/Jóvenes: que poco sabemos de ellos 255

José Olavarría A.

ECONOMIA

La economía chilena en 1998 279

Oscar Muñoz G.

Chile en la Cuenca del Pacífico. La importancia de APEC 295

Andrés Angulo F.

RELACIONES EXTERIORES

Los desafíos de la política exterior chilena durante 1998 303

Paz V. Milet G.

Chile-Perú: revisando las agendas con una mirada de futuro 311

Francisco Rojas Aravena

El programa de Cooperación Horizontal de Chile 321

Sergio Gómez E.

Autores 334

**CIUDADANIA, PARTICIPACION
Y POLITICAS SOCIALES**

CHILE 1997-1998. LAS REVANCHAS DE LA DEMOCRATIZACION INCOMPLETA¹

Manuel Antonio Garretón M.

Del falso consenso al debate crítico

Desde 1997, el país ha dado una demostración que los consensos aparentes llegaban a su término y que el tan alabado modelo chileno de “doble transición a la economía de mercado y a la democracia” acusaba puntos débiles, que para unos mostraban un *impasse* y para otros un fracaso. Los intelectuales de izquierda opuestos a la Concertación habían mantenido hasta entonces un silencio perplejo. Las observaciones críticas de los intelectuales afines a la Concertación, entre las cuales las del autor, era acalladas por la clase política oficial, incluyendo gobierno y oposición de derecha. Quienes adheríamos a lo que fue la transición política chilena desde la dictadura a los primeros gobiernos democráticos y a la Concertación de Partidos por la Democracia y sus gobiernos, pero planteábamos alternativas de acción posibles frente a una conducción política, que considerábamos equivocada en algunas materias en el primer gobierno democrático y completamente inexistente en el segundo, hacíamos ver lo difícil que era una postura crítica y de apoyo a la vez, en un mundo político completamente auto-satisfecho y donde, hay que reconocer, varios indicadores mostraban éxitos inmediatos importantes e indiscutibles.

¹ Versión completa de un trabajo publicado en forma resumida, en *la revista Mensaje*, N° 476, enero-febrero 1999.

Entre los elementos críticos que se señalaban mucho antes que aparecieran los *best sellers* y las cartas abiertas sobre el Chile actual, había al menos dos.

Por un lado, el cuestionamiento de que hubiera realmente una democracia de consenso ahí donde sólo había acuerdos adaptativos y pragmáticos y donde todos los grandes temas estaban empantanados o no eran objeto de debate: la cuestión constitucional, el tema de los derechos humanos, la política frente a las Fuerzas Armadas, los llamados enclaves autoritarios, el modelo socio económico y redistributivo, la reducción del rol dirigente del Estado y la debilidad de los procesos de descentralización, regionalización y democratización local, las relaciones laborales, la sustentabilidad del modelo de desarrollo. Por ello, malamente podía hablarse de consenso.

La verdad es que en todos estos años sólo ha habido debate y consenso aparente, en tres puntos: el término de la dictadura, la política contra la pobreza y la prioridad educacional en los niveles básico y medio. En nada más. Incluso en estos tres puntos, el consenso parece limitarse al enunciado y no alcanza al contenido e implementación de políticas.

Por otro lado, el cuestionamiento a la idea que aún estábamos en transición, idea que desde la oposición y el gobierno servían para impedir un debate de fondo sobre cualquier tema, con el pretexto de que se podía alterar la “estabilidad” o “governabilidad” de una transición que ni retrocedía ni avanzaba un solo paso desde la elección del primer gobierno democrático y la reforma que permitió elecciones municipales. Curiosa transición que, al paso que vamos, puede llegar a durar más que la propia dictadura a la que reemplazó!. A la oposición de izquierda esta idea de una transición inmutable y sin horizonte de término, le permitía negar la diferencia entre dictadura y democracia y rechazar toda la estrategia de término de ésta, partiendo por el plebiscito que nunca les gustó.

La verdad es que la transición política en Chile se desencadenó con el resultado del Plebiscito de 1988, cancelándose ahí definitivamente toda posibilidad de regresión autoritaria pese a las intenciones claramente no democráticas del pinochetismo civil y militar. Y ella terminó con el ascenso del primer gobierno democrático en Marzo de 1990, pese a que algunos le llamaran “gobierno de transición”, para luego decir que la transición había terminado y poco después, a raíz del “boinazo” y presiones militares, reconocer que en realidad no había terminado (¿en qué quedamos?, y ¿por qué los gobiernos que siguen no son de transición... porque duran seis y no cuatro años?).

Pero el término de la transición no significó que, junto a gobiernos plenamente democráticos, el régimen político y la sociedad hubieran alcanzado la democracia propiamente tal. Se trató de una transición incompleta que dio origen a una democracia restringida de baja calidad y llena de enclaves autoritarios. La tarea no era ni continuar con la transición, ya terminada, ni consolidar el nuevo régimen post-autoritario que ya estaba consolidado en la medida que no había regresión autoritaria posible. Era reformar profundamente ese régimen y generar una auténtica democracia política donde no fueran los poderes ficticios o las minorías políticas las que fijan los límites de la voluntad y soberanía populares. Es decir, había que resolver los problemas dejados por la transición y que ésta no había resuelto.

Desde principios de los noventa se hizo ver por parte de algunos, entre los que me cuento, que si no se resolvían los problemas pendientes, estos impedirían encarar el futuro y tomarían su revancha habiéndose presentes permanentemente. El silencio de los críticos de la izquierda radical a la estrategia de la Concertación y el clima de autosatisfacción predominante, por razones sin duda diferentes, en esta última y en la oposición de derecha, impidieron que estos cuestionamientos, elaborados y publicados desde muy temprano, se hicieran parte de un debate nacional, el que vino a generalizarse sólo en los dos últimos años.

Los climas políticos y las “sensaciones térmicas”

Así, los años 1997 y 1998 significaron para la política chilena una especie de transposición de los fenómenos climáticos reales que tanto han afectado al país: se produjo una creciente transformación de la sensación térmica, más allá de los indicadores de la temperatura propiamente tal.

Tres principales “sensaciones térmicas” dividieron o polarizaron a los actores políticos y a la opinión pública.

Por un lado, la oposición de derecha, que atribuía el éxito del “modelo chileno” a las herencias, tanto económicas como políticas del régimen militar, denunciaba la incapacidad de conducción y liderazgo del gobierno y su desviación de los “problemas que aquejan a la gente” por no respetar la ortodoxia del modelo económico y por intentar introducir reformas políticas que alteraran dichas herencias institucionales (las referidas a los denominados “enclaves autoritarios”, especialmente senadores designados, sistema electoral, composición del Tribunal Constitucional, inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Consejo de

Seguridad Nacional, etc.). Las elecciones parlamentarias de Diciembre significaron reforzar esta sensación térmica, sin ninguna conexión con los datos reales, como veremos, y fortalecieron las aspiraciones presidenciales a través de una precandidatura de los sectores más ligados al pinochetismo y a la visión de la política como el “hacer cosas”. Ya entrado el segundo semestre de 1998 se oficializaba la pre-candidatura de Joaquín Lavín, exitoso alcalde de Las Condes, por la UDI, más cercana al pinochetismo, mientras Renovación Nacional, muy disminuida en su proyección simbólica y en su liderazgo nacional, promovía desesperanzadamente al ex-Senador Sebastián Piñera como pre-candidato para competir con Lavín, quien posteriormente se retiró. Ningún candidato del bloque de derecha tiene alguna probabilidad de ganarle al candidato presidencial de la Concertación, cualquiera que éste sea.

Por otro, estaban sectores de gobierno “satisfechos”, tanto con el modelo económico como con la marcha de la democratización política. Estos afirman que casi todo va bien, aunque se reconoce un déficit en lo social y un cierto malestar. Para este sector estaríamos en una especie de “post-política”, en la que hay sólo que introducir alguna corrección mínima, pero lo mejor es que las cosas se autorregulen, dado que lo deseable es la menor intervención de gobierno y discusión política posibles. La variante a esta sensación la representa otro sector de gobierno que cree que alguna intervención es posible a través de “operadores políticos” y negociaciones cupulares, generalmente fracasados, en cada una de las operaciones intentadas.

Es desde estos sectores de gobierno y de la Concertación de Partidos por la Democracia que se hace un primer planteamiento escrito a mediados de 1998, firmado y promovido por algunos ministros, que se centra en los éxitos obtenidos y señala que los problemas existentes se deberían a rasgos propios de toda modernización. El documento critica el desencantamiento de muchos sectores de la Concertación y llama a cerrar filas en torno al gobierno y el futuro de la Concertación.

La otra gran sensación térmica, que se hizo predominante en términos políticos en 1997, es la del descontento. Ella fue recogida a través de un *best seller* de un intelectual de izquierda que combinaba metáforas, imágenes y discursos filosóficos y sociológicos a la moda y del Informe del PNUD sobre Desarrollo Humano en Chile, que mezclaba datos empíricos interesantes con una muy confusa y ambigua interpretación teórica. Ella esté presente en sectores de gobierno desilusionados y, sobre todo, en la oposición de izquierda.

Hay aquí también al menos dos vertientes. En su versión moderada, de grupos pertenecientes a la Concertación, se afirma que los resultados electorales de Diciembre 1997, muestran una lejanía y descontento de la gente respecto de la política; que hay que hacer un juicio a la transición porque ella no ha superado los enclaves autoritarios y ha permitido impunidad de los militares, cuyo símbolo es la llegada de Pinochet al Parlamento como Senador vitalicio, y ha prolongado un modelo económico cuyos resultados sociales no guardan relación con los éxitos de ciertos indicadores macro-económicos. Los sectores pro gubernamentales que se ubican en esta posición salieron al paso a documento más “oficialista” mencionado anteriormente, con otro en que se expresa una visión más crítica, señalando que esos problemas provienen en parte de la propia conducción de la Concertación. Siempre dentro del mundo de la Concertación, hubo un tercer grupo que emitió un documento que se plantea mucho más duramente frente al modelo socioeconómico heredado de la dictadura y la incapacidad de superar los enclaves autoritarios.

En la versión radical, proveniente de sectores de oposición de izquierda, la transición democrática no ha sido tal y no hay diferencia “esencial” entre la dictadura y la actual democracia, por lo que estarían en presencia de un simple “transformismo” (¿?) destinado a mantener un modelo económico neo-liberal que es producto de la “cúpula” formada por los militares, las transnacionales y los tecnócratas (algo así como la nueva versión en este mundo globalizado de “la oligarquía y el imperialismo”(!))

Todo este clima impidió un análisis y una solución adecuada del principal conflicto social de 1997. Este fue desencadenado por el movimiento estudiantil de la principal Universidad del país, la Universidad de Chile, a mediados de 1997, luego proyectado a casi todas las universidades públicas. Dicho movimiento culminó en un referéndum en Abril de 1998, que no resolvió ninguno de los problemas planteados, excepto permitir expresar el descontento y abrir una cierta participación. Ello por cuanto se confundió la salida de un conflicto con el debate de las cuestiones de fondo respecto de la profunda crisis tanto del modelo de educación superior como de la situación de las Universidades públicas.

Pero, sobre todo, este clima ha impedido entender la naturaleza de los fenómenos políticos más importantes ocurridos en los dos últimos años, llevando a una verdadera confusión y desconcierto tanto de la clase política, como de los analistas e intelectuales en este ámbito, afectando esta situación especialmente a la Concertación de partidos gobernantes formada por la Democracia Cristiana, especialmente, y Partido Radical Social

Demócrata en el centro, y Partido por la Democracia y Partido Socialista, más a la izquierda).

Las elecciones parlamentarias de Diciembre de 1997

Las elecciones parlamentarias de Diciembre de 1997 fueron las primeras desde la reinauguración democrática que no se hacen en conjunto con las presidenciales. Pretender ver en ellas un rechazo a la política, debido a la disminución del universo electoral por la baja inscripción de jóvenes, la abstención y el aumento significativo de los votos nulos y blancos, parece un error extensamente instalado en el país. De hecho, el fenómeno de inscripción puede arreglarse simplemente con la inscripción automática que baje los costos actuales de la participación, pues se les exige a los jóvenes un acto abstracto de inscripción sin que aún comiencen las campañas y motivaciones electorales. El fenómeno de la abstención propiamente tal sigue siendo muy bajo (entre 11 y 13%). Su leve aumento de los últimos años corresponde a la regularización de una situación anómala, en que la abstención había sido extremadamente baja en relación a la tasa histórica, en los momentos del plebiscito y en las siguientes elecciones debido a la inauguración democrática post dictatorial. Por otra parte, es un error serio sumar las no inscripciones, abstenciones, votos blancos y nulos para así señalar un rechazo global a la clase política y más aún al gobierno. Aún así, la participación electoral sería del 60%, lo que en términos comparativos es alta. En cuanto a los votos nulos, estos aumentaron significativamente a un 17%, lo que obliga a analizar el sentido de ellos. No teniendo investigaciones ni acceso a los datos directos, sólo es posible hacer hipótesis sobre el significado del acto de votar nulo que, insistimos no tiene nada que ver con la abstención o no inscripción y sólo en una de sus significaciones coincide con el voto blanco. El rechazo a todas las opciones que se presentan por no coincidir con la propia o por no tener ninguna, la convicción que aunque se tenga una opción y ella está presente en alguna de las candidaturas el sistema electoral e institucional vigente no le permitirá ser elegida, el rechazo a algunas políticas concretas (lo que es muy minoritario y no podrían sumarse entre sí), además de la anulación clásica por ignorancia como votar, son algunos de los significados posibles de los votos nulos. Estos no pueden sumarse en un sólo significado y cada uno de ellos abarca un porcentaje muy bajo de votos.

Si hay rechazo a la política o a los políticos, y no negamos que lo haya, ello no puede deducirse de los datos electorales.

Tampoco los resultados políticos mismos permiten hablar de un malestar o voto de castigo al gobierno a la clase política en su conjunto, porque supuestamente se habría privilegiado el voto no político, favoreciendo a los candidatos que “hacen cosas y están cerca de la gente”. Sin duda que tal malestar existe y mucho más extendido de lo que pueda suponerse: pero ello no puede deducirse de los resultados electorales. Más bien se deduce de la enorme distancia entre la clase política y la opinión pública en relación a ciertos eventos o problemas claves, como por ejemplo, el tema de los derechos humanos y la detención de Pinochet en Londres en 1998, a lo que nos referiremos más adelante. Por el contrario, las elecciones fueron claramente políticas y en términos generales y de los grandes números, salvo excepciones puntuales significativas, se castigó el independentismo, la pura presencia mediática, el pragmatismo o “cosismo” y las líneas políticas ambiguas. Detrás de ello puede verse un profundo anhelo de ideas y de debate político verdadero, lo que la clase política parece no percibir.

Los resultados políticos más significativos fueron, el que la oposición de derecha se mantuvo en torno al 35% y se mantuvo la ventaja del sector Renovación Nacional respecto de la UDI, pero la derrota de los liderazgos simbólicos de aquella frente a sus aliados de la UDI (más ligada al pinochetismo) muestra la escasa claridad y proyección de la opción de derecha democrática. Tanto las elecciones de Diciembre de 1997, como todo lo ocurrido el año 1998, serán una clara demostación que fue derrotado por tiempo indefinido un proyecto de derecha democrática y la derecha afirmó su carácter constitutivo y su núcleo esencial: el pinochetismo.

Los partidos de la Concertación, que apoyan al gobierno, mantuvieron su porcentaje, excepto la Democracia Cristiana, que bajó cuatro puntos, los mismos que bajó la Concertación, y que por primera vez quedó por debajo de sus aliados PS-PPD, Esto no puede ser interpretado, entonces, como un voto de castigo al gobierno, sino sólo a la línea política de la Democracia Cristiana que es vista como demasiado hegemónica al interior del bloque de gobierno. En el seno del bloque PS-PPD, hay una muy escasa distancia a favor de los segundos, pese a la importante disminución de parlamentarios socialistas debido a la errada opción táctica en cuanto a las candidaturas. Este permanente empate no hace sino mostrar que se trata, a juicio de la gente, de un solo conglomerado político que debiera unificarse con el fin de solidificar el polo de centro-izquierda en la Concertación, aunque sus dirigentes se niegan a reconocerlo.

Como era de preverlo, los porcentajes alcanzados por la Concertación, no le permitieron aumentar su número de parlamentarios de modo de alcanzar

los quórum para realizar las reformas políticas y constitucionales que le permitan terminar con los enclaves autoritarios, especialmente los senadores designados. Ello se vía agravado por la incorporación de Pinochet al Senado en calidad vitalicia según la Constitución vigente. La Concertación quedó sin estrategia para superar dichos enclaves y la sensación predominante fue que la transición, como se denomina equivocadamente al proceso actual, estaba bloqueada para algunos, o había fracasado para otros.

Cambio en el Ejército y Pinochet Senador Vitalicio

La salida de Pinochet de su cargo de Comandante en Jefe del Ejército después de casi veinticinco años, tuvo un doble significado, el segundo de los cuales opaco al primero. Este consistía en las exitosas operaciones realizadas por el gobierno para que al término del mandato establecido por la Constitución, Pinochet fuera reemplazado por un general no ligado estrechamente al núcleo pinochetista ni a quienes estaban más duramente identificados con el régimen militar, es decir, a alguien más independiente respecto de esos puntos, como parece serlo el General Ricardo Izurieta. Tardará en saberse con exactitud el costo político que esto tuvo para el gobierno y que concesiones hubo que hacer frente al pinochetismo. Al menos las concesiones simbólicas, probablemente nunca estipuladas o explicitadas, fueron evidentes. Ello se ilustra tanto con el rechazo del Gobierno a la acusación constitucional contra Pinochet presentada en Chile por diputados del partido Demócrata Cristiano, como en la defensa de una supuesta inmunidad diplomática otorgada a Pinochet para su viaje a Londres y la oposición a que sea juzgado por crímenes contra la humanidad fuera de Chile con ocasión de la detención del ex-dictador en Londres en Octubre de 1998.

El segundo significado fue que el ex-dictador, por mandato constitucional pasaba a asumir la función de Senador Vitalicio, lo que era un símbolo de la mayor violencia a un proceso de democratización aún incompleto. Que ello fuera una cuestión sabida y que estaba en la Constitución no quita este aspecto de violencia, cuya inevitabilidad corresponde a otra discusión. Lo que es imposible de soslayar es que de todos modos la clase política chilena debía dar una señal de su desaprobación de una situación a la que había sido obligada. Y ello se hizo a través de manifestaciones en el momento que el ex-dictador asumía su cargo y, sobre todo, a través de la acusación constitucional presentada por algunos diputados Demócrata Cristianos, luego de la oposición del gobierno y con intenso debate polarizado en el seno de ese partido dada la oposición de su directiva a esta

iniciativa. El PS apoyó siempre la acusación y el PPD lo hizo con cierto retardo. El bloque gubernamental sufrió una profunda división frente al principio fundamental de oposición que había permitido su constitución: Pinochet. Ello se repetiría a fines de año con ocasión de la detención de este último en Londres.

Quienes dentro de la Concertación y el gobierno se opusieron a la acusación constitucional, que por razones legales sólo podía hacerse por la actuación de Pinochet durante el período democrático, adujeron dos tipos de razones. La primera de tipo jurídico y la segunda política, en el sentido que esto era hacer un juicio a toda la transición y a los dos gobiernos democráticos. Cayeron exactamente en la misma argumentación de la derecha y no entendieron que la cuestión central era una demostración simbólica y política sobre algo en lo que no cabe perdersse: el repudio a Pinochet tanto por parte del país como de la opinión pública mundial. El gobierno cometió el error de intervenir para que no se presentara la acusación y luego para que no fuera aprobada, cuando el más mínimo sentido común obligaba a permanecer al margen de una cuestión en la que no le cabía institucionalmente ni aprobar ni rechazar, sino guardarse como instancia política arbitral para más adelante si fuera necesario.

Luego de la derrota de la iniciativa, se acentuó la incertidumbre de cómo se sale de una situación institucional que bloquea la democratización y retrotrae permanentemente al país a un pasado que permea todas las cuestiones del presente y futuro. El gobierno ha anunciado respecto de los senadores designados una reforma constitucional encaminada a permitir ampliar las funciones del plebiscito o referéndum, de modo que sea la ciudadanía la que resuelva la cuestión de los enclaves autoritarios. Si se presentara como una reforma constitucional permanente, parecería una iniciativa poco madurada, en la medida que introduce necesarios componentes de democracia directa sin cambiar el conjunto del ordenamiento constitucional, lo que puede generar incoherencias y problemas de gobernabilidad futuras. En cambio, sí parece ser la única solución para un conflicto preciso que no tiene ninguna otra solución posible y que permanece latente como una prolongación de la dictadura. Esto implicaría presentarlo como una reforma transitoria destinada explícitamente a resolver el conflicto que quedó pendiente luego del plebiscito de 1998 que puso término a la dictadura de Pinochet. Pero al igual que aquel plebiscito, esta iniciativa requeriría de un enorme y concertado esfuerzo de movilización pacífica de masas para obligar a sus opositores a aceptar el desafío.

El error del gobierno en esta coyuntura tendrá profundos efectos en lo que fue el acontecimiento político de 1998: el arresto del ex-dictador en Londres.

Los 25 años y la reconciliación

De algún modo, la cuestión anterior, que llena el primer semestre de 1998, se liga a otra que se tiene su culminación en el mes de Septiembre, en que se cumplieron los simbólicos veinticinco años del golpe militar de Septiembre de 1973 que puso fin al gobierno socialista de la Unidad Popular y a la vida del Presidente Allende, destruyó la democracia chilena e impuso una dictadura militar dirigida por Pinochet durante diecisiete años.

El gran tema, más allá del debate ideológico en torno a la Unidad Popular, el golpe de Estado de 1973 y la dictadura militar de Pinochet, es si el país ha logrado o no su reconciliación o permanece dividido y escindido como lo estuvo en relación a esos tres hitos. Lo cierto es que los sectores de centro e izquierda, enfrentados en 1973, han establecido una sólida alianza social y política que se expresa, entre otras cosas, en dos gobiernos sucesivos. Por lo que el problema real es la reconciliación entre las Fuerzas Armadas y la minoría política de derecha, por un lado, y el conjunto de la sociedad, por otro.

En esta materia los datos nuevos son, por un lado, el cambio en el liderazgo del Ejército que significó que una nueva generación asume el mando, más ligada a cuestiones institucionales y profesionales que a una postura política, aunque ésta es siempre de respaldo al golpe y gobierno militares y, en particular a Pinochet. Por otro lado, posiciones muy definidas de la nueva autoridad de la Iglesia en materia de Derechos Humanos, especialmente en torno a la información necesaria del destino de los detenidos desaparecidos. En tercer lugar, algunas definiciones novedosas de los Tribunales respecto de ciertos casos de violaciones de derechos humanos bajo la dictadura, que llevarían a completar las investigaciones, incluso más allá de la ley de amnistía. Finalmente, la discusión en torno al proyecto de ley de terminar con el feriado del 11 de Septiembre, que después de un empate en el Senado, culminó con un acuerdo promovido por el mismo Pinochet junto al Presidente del Senado, para reemplazar en el futuro esa celebración, en una fecha distinta de Septiembre, por una destinada a la unidad nacional. Todos estos elementos invocan de una u otra manera la cuestión de la reconciliación nacional. Si bien el concepto no es claro y cada cual tiene su propia interpretación, es

evidente que pareció crearse un clima más favorable en torno a ella, cualquiera sea su significado.

Los dos problemas básicos, sin cuya resolución el terr a no tiene destino, son, primero, la información por parte de las instituciones y personas responsables respecto del destino de las víctimas de las violaciones de derechos humanos bajo la dictadura y algún tipo de sanción que consagre el término de la impunidad. Segundo, el reconocimiento de las Fuerzas Armadas de su responsabilidad institucional en los crímenes y violaciones a los derechos humanos, partiendo por lo ocurrido el mismo día 11 de Septiembre. Ambas cosas están muy lejos aún de producirse. Quizás, en algún momento futuro, una vez definitivamente separados todos los militares que estuvieron implicados en tales crímenes y violaciones, pueda haber algún gesto de las Fuerzas Armadas como lo ha habido en otros países. Parece más difícil que este paso sea dado por la derecha pinochetista que ve en la dictadura militar y en la preservación de sus símbolos, de su institucionalidad heredada y de su modelo socio-económico y político, su único fundamento histórico y sello de identidad.

De nuevo Pinochet. De Senador Vitalicio a detenido

El arresto de Pinochet en Londres por la acusación de la Justicia española de crímenes por genocidio, tortura y terrorismo de Estado, es una expresión y catalizador de todos los problemas señalados.

Por un lado, mostró hasta qué punto no había consenso ni sobre las cuestiones vitales de violaciones a los Derechos humanos bajo la dictadura, reparación, justicia, impunidad, reconciliación, ni sobre el modo en que han sido tratadas o pueden serlo en el futuro. Es decir, se puso en evidencia hasta qué punto los problemas del pasado SON problemas del presente y del futuro por la incapacidad para haberlos resuelto. La frase definitiva de esta situación fue la primera reacción del Arzobispo de Santiago: estas cosas ocurren porque no se ha hecho justicia en Chile.

En segundo lugar, el pinochetismo mostró que la derecha política no es otra cosa que su expresión fidedigna y que en ella toda idea, proyecto o posición queda subordinada a esta verdad esencial. Su visión de una soberanía nacional aplastada o violentada por aquello que la casi unanimidad de la humanidad celebraba como una oportunidad de justicia y de civilización, fue apoyada por los poderes fácticos económicos y más mediáticos, así como los poderes fácticos de jure, como es el poder Judicial.

En tercer lugar, el gobierno cometió todos los errores posibles, desde el otorgamiento de una misión especial tardía a Pinochet que no daba ninguna inmunidad, pasando por la contradicción al afirmar inicialmente que la cuestión no era asunto de Estado ni afectaba la transición o la estabilidad democrática ni era política, para terminar organizando operaciones políticas para que “Pinochet vuelva a Chile” y afirmando que había una cuestión de soberanía nacional. Con ello se legitimó el discurso desestabilizador de la derecha y se aceptó en esta materia la presión militar, lo que permitió, por supuesto que sólo en lo referente al asunto Pinochet, un virtual co-gobierno con las Fuerzas Armadas, a través del Consejo de Seguridad Nacional. Su planteo inicial de la posibilidad de avanzar en la reconciliación a través de la justicia se diluyó enteramente al no diferenciarse, sino en el discurso, de la posición central de la derecha y el pinochetismo civil y militar: que vuelva Pinochet a Chile sin condiciones. Perdió así toda autonomía política y quedó sin conducta frente a las alternativas futuras de esta situación. Al igual que en el caso de la acusación constitucional, y no se ha insistido suficientemente que de haber actuado adecuadamente en esa circunstancia se habría evitado el episodio del arresto y sus efectos, el gobierno no supo dar conducción política, se separó de la opinión pública y presionó y tensionó a la Concertación haciendo de su posición una doctrina obligada y la única línea correcta, no permitiendo el debate de alternativas.

En cuarto lugar, se produjo la mayor distancia y un profundo alejamiento entre la clase política que respondía en forma autorreferente y provinciana a la situación, y una opinión pública que veía perpleja como aquélla se enredaba con los temas de soberanía nacional, hacía un doble discurso y era incapaz de representar la demanda de justicia de la gran mayoría de los chilenos y, por supuesto, de toda la humanidad. Será difícil explicar a esa opinión pública, es decir, a la sociedad chilena, por qué razón, cuando un problema crucial no ha sido ni podrá ser resuelto en Chile y cuando la mayoría del país y la humanidad toda expresan su voluntad de resolverlo para hacer avanzar la civilización, la justicia y la dignidad de este país, su clase política esgrime falsa y orgullosamente el argumento “que nosotros resolvemos nuestros problemas”. ¿Quién en su sano juicio puede creerle?

El futuro de la Concertación y las candidaturas presidenciales

Tanto la interpretación de los resultados electorales, como la discusión y tensión internas con ocasión de la acusación constitucional, como el debate más general en torno a los documentos programáticos mencionados y otros tópicos, como, sobre todo el arresto de Pinochet y la cuestión de la

democratización y reconciliación bloqueadas, han generado un debate en torno al futuro de la Concertación. La cuestión de fondo está en que, pese a los indudables éxitos políticos y socio-económicos de los dos gobiernos de la Concertación y a que no existe otra alternativa política de futuro, hay una sensación de frustración debido a la persistencia de los enclaves autoritarios, la exacerbación de las desigualdades sociales aunque haya menos pobreza estadística, la falta de una redefinición del papel dirigente del Estado y de instituciones que fortalezcan actores sociales, ciudadanía y sociedad civil, así como la banalidad del debate público y la ausencia de visiones que movilicen las energías sociales. Ello no puede achacarse sólo a la acción de la derecha opositora y del pinochetismo ni tampoco, como hacen los voceros y sectores cercanos al gobierno, a la naturaleza y éxitos del mismo proceso de modernización, por lo que serían “normales e inevitables”. Hay problemas de conducción política y de contenido de los proyectos y programas gubernamentales y de la Concertación (por ejemplo, la reforma judicial recién aprobada, la política de descentralización y de seguridad ciudadana, la reforma del Estado la política cultural, de educación superior, medio ambiental y de salud, para citar sólo algunas ilustraciones) que deben ser sometido a debate, para no caer en que aquello que se ha hecho era lo único que podía hacerse.

En cierto modo, la pequeña crisis de gabinete a mediados de 1998 que llevó al reemplazo del equipo político (Ministerios de la Presidencia, Gobierno, Interior, Defensa) y a la salida del Ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, por presión de la Democracia Cristiana recelosa de la presencia en el gabinete de un futuro candidato presidencial, fue revelador de esta falta de conducción política de un gobierno que, pese a la calidad de su gestión en ciertos ámbitos, no logra definir el sentido más profundo de un proyecto político. Ello no tuvo ninguna mejoría con el nuevo equipo ministerial. Ya hemos dicho que la crisis política desatada con el arresto de Pinochet llevó esta situación de desconducción gubernamental y de tensión interna en la Concertación a un punto extremo. Aunque también mostró este episodio la enorme resistencia del conglomerado para mantener su unidad pese a todo.

Pero el tema del futuro de la Concertación no es puramente político-ideológico o teórico o de conducción política gubernamental, sino que se relaciona con el problema de su liderazgo político, especialmente, respecto de quién la encabezará en las próximas elecciones presidenciales de 1999. Se trata de la competencia entre los dos polos principales, Democracia Cristiana y bloque PS-PPD, por primera vez en empate electoral virtual o con leve ventaja del segundo, todo lo cual deja al Partido Radical minoritario en posición de jugar un rol arbitral. Esta cuestión se precipitó

después de los resultados electorales de Diciembre de 1997 que acusaron una baja de la Democracia Cristiana, la que además no tenía una figura que oponer ni al eventual candidato de derecha, ni, sobre todo, al interior de la Concertación, a la figura del líder indiscutido del PS/PPD, ex-Ministro de Obras Públicas y número uno en todas las encuestas de opinión pública, Ricardo Lagos. Ello llevó a la DC a acelerar la nominación de su propio candidato presidencial para competir al interior de la Concertación, resultando designado el Presidente actual del Senado, Andrés Zaldívar.

Si bien todos afirman que debe haber un candidato único de la Concertación y se proponen elecciones primarias internas, sobre cuyo mecanismo hubo un acuerdo reciente, la verdad es que parece imposible impedir que Ricardo Lagos sea efectivamente candidato presidencial, pues si no lo fuera, ello crearía un desconcierto ciudadano y un alejamiento de la Concertación de gran parte del electorado de centro-izquierda que no apoya una nueva candidatura presidencial demócrata cristiana. Por otro lado se ve muy difícil que el conjunto de la Democracia Cristiana apoye una candidatura de Ricardo Lagos, pese a que todo indica que para la revitalización de la Concertación y para el propio futuro de una Democracia Cristiana renovada, la mejor alternativa es no disputar un liderazgo natural indiscutible como el de Lagos, tomando en cuenta, además, que ya la Democracia Cristiana ha encabezado dos veces el conglomerado de gobierno y ya no es el socio mayoritario dentro de él. En este sentido, haber evitado una negociación y acuerdo en torno a Lagos, reemplazándola por unas elecciones primarias, podría llevar a una situación muy crítica en el bloque si se dan resultados que expresan una movilización partidaria militante más que la situación política real y el estado de ánimo del electorado nacional de la Concertación, clara y definitivamente favorable a Lagos.

En los próximos meses, las sensaciones térmicas, revolucionadas con la detención de Pinochet, deberán ceder pasos a análisis razonables, a debates en torno a ideas y proyectos y a decisiones muy cruciales sobre el liderazgo político de la Concertación de Partidos por la Democracia, única alternativa política viable por el momento en Chile.